

Mantengamos el rumbo

La historia de la oposición política al gobierno del Presidente Chávez se puede dividir en dos grandes etapas. La primera es la que media entre el 11 de abril de 2002 hasta el paro nacional que comenzó en diciembre de ese año y finalizó en febrero de 2003. En ella privaba el espíritu de salir de Chávez a como diera lugar, sin importar mucho lo que viniera después. Grandes movilizaciones de calle y el calentamiento de la opinión pública a través de los medios de comunicación social, crearían las condiciones para una intervención prodigiosa de la Fuerza Armada, que sería respaldada posteriormente por la comunidad internacional. La segunda etapa comienza con los acuerdos de mayo de 2003 y prosigue hasta hoy. Mediante estos acuerdos, gobierno y oposición convinieron en que la crisis política debía resolverse siguiendo estrictamente las reglas de juego establecidas en la Constitución de 1999. Así se escogió la vía del referéndum revocatorio para que la sociedad venezolana decidiera soberanamente si Chávez debía continuar ejerciendo su cargo de Presidente de la República o le debía ser revocado. Lo que se extendió a todos aquellos funcionarios electos por voluntad popular que cumplirían con las condiciones para ello. En tercer lugar, se aceptó la mediación y vigilancia internacional a través de la OEA, el Centro Carter y el PNUD, para facilitar y garantizar la buena marcha de los procesos que se debían emprender bajo esta dirección.

El rumbo escogido fue una gran victoria de la conciencia cívica y democrática venezolana. Lo logrado hasta hoy a partir de allí no es poco. Una vez conformado el equipo de rectores del CNE, en medio de muchos conflictos, los venezolanos fuimos convocados en diciembre pasado a respaldar con nuestras firmas la activación de diversos procesos revocatorios. Lo hicimos además con gran despliegue de civismo, contraviniendo a esa parte extremista del liderazgo nacional que siempre nos incita a lo peor. En esta oportunidad, El CNE organizó satisfactoriamente el proceso de consulta, conforme a un compendio de disposiciones que, no obstante algunas quejas iniciales, demostró a la postre su utilidad y conveniencia. Al final de la jornada, las voces de violencia se aplacaron y la opinión política del país registró una apreciable disminución en sus niveles de crispación.

Pasamos luego de la consulta electoral a la etapa de la verificación de las firmas, más difícil y complicada que la anterior, por lo inédito y complejo del proceso; sobre todo, porque tiene lugar en una atmósfera general de desconfianza, convertida en ley hegemónica de la política vernácula. Según lo anunciado, en esa etapa continuaremos hasta mediados de marzo, cuando finalmente el CNE decidirá si convoca o no los procesos referendarios solicitados contra el Presidente Chávez y los diputados de oposición en la Asamblea Nacional Legislativa.

Vientos y mareas tempestuosas

Como era de esperar, durante la etapa de verificación de firmas el foco de la atención pública se ha centrado en el proceso de verificación de las firmas que piden la convocatoria del referéndum presidencial. No había concluido el tiempo de recolección establecido cuando ya el Presidente las había condenado. Abrió fuego antes de tiempo acusando a la oposición de haber tramado un megafraude. Con lo cual se llevaba por medio el control y vigilancia que habían desarrollado en el proceso el CNE, la Fuerza Armada, los partidos, incluyendo al

MVR, y los organismos internacionales. Con este grito de guerra se desconocían las reglas del juego, a los jugadores y al árbitro. Tras la consigna del megafraude comenzaron las movilizaciones organizadas por el Comando Ayacucho, las declaraciones de los dirigentes del partido oficialista y la campaña pública dirigida por el propio Presidente esgrimiendo supuestas pruebas que respaldan sus afirmaciones. Todo ello con dos propósitos muy claros. Primero, presionar al CNE para que extremen más allá de los límites deseables y necesarios las técnicas de verificación. Segundo, crear una matriz de opinión pública, nacional e internacional, que favorezca el no reconocimiento de una eventual decisión afirmativa del CNE, legitime su impugnación y la dilación de su reconocimiento.

El grito de guerra ha servido y servirá también para que se orquesten las formas más primitivas de presión, agresión y campaña política frente al CNE, los organismos observadores internacionales y el movimiento de la oposición. Con descaro y cinismo se utilizan las cadenas de radio y televisión para hacer proselitismo político y desmoralizar la voluntad referendaria contra el Presidente. Con actitudes semejantes se utilizan los recursos del Estado para sufragar los costos de megamercados que sirven para garantizar concentraciones de simpatizantes del Presidente. Como si fuera poco, se utiliza a la Fuerza Armada y los organismos de seguridad para respaldar las acciones de calle del oficialismo.

El gobierno es pues quien han lanzado no la primera piedra sino una cantera de provocaciones que pueden desatar reacciones violentas, exasperar la rabia por el abuso de poder y levantar los vientos que soplan en la dirección de aventurarse por los espinosos caminos de la fuerza.

El CNE ha acusado en parte la presión del Presidente de la República. Cada vez más ha ido extremando las medidas técnicas de verificación de las firmas que solicitan la activación del referéndum Presidencial, con el grave peligro de llevarse por delante la voluntad del

elector. Con lo cual se han alargado los plazos para emitir su decisión, violando internamente su propia normativa. Por otra parte, el equipo rectoral se ha venido fraccionando y sus decisiones son tomadas tres a dos, lo cual contribuye enormemente a su debilitamiento.

En este contexto, algunos líderes y voceros de la oposición política al Presidente Chávez, están haciendo llamados a la opinión pública para responder contundentemente en la misma dirección. Se dice que a la violencia y al descaro oficialista sólo se le puede contraponer una actitud semejante. Se insiste que el referéndum presidencial avanza en un terreno cenagoso, "nos están tomando el pelo y desmoralizando". Se interpreta que la falta de respuesta agresiva por parte del liderazgo político de oposición ante tanto atropello será leído por el gobierno como una muestra de debilidad. Al contrario ya llegó la hora de cambiar de forma de lucha de verdad, verdad. En este supuesto se cuentan las balas y los cañones, y se miden las fuerzas. Bajo esta línea se argumenta desde programas radiales y televisivos, en columnas de opinión, en los medios escritos y desde algunos llamados públicos a la acción.

Está en juego una forma de entender el poder político

El modo como el Presidente Chávez ha entendido el ejercicio del poder político ha sido su principal causa de deslegitimación. Una forma en la que la voluntad del jefe es lo que importa y la que se impone prescindiendo de toda regla, hasta de la misma Constitución Nacional promovida por él. Los cuadros intermedios del gobierno ejecutivo, los gobiernos estatales y locales y los diputados oficialistas se comportan como una logia al servicio de los dictámenes superiores del Presidente. Son los hombres y mujeres del Presidente. El resto de las instituciones deben acoplarse a esta voluntad que se justifica por su fin: la revolución al servicio del pueblo.

La oposición se va diferenciando precisamente en el modo como se entiende la construcción del poder bajo formas democráticas. El

golpe de estado del 11 de abril y las escaramuzas del paro nacional convocado en diciembre de 2003 han dejado lecciones muy importantes. Una parte de la oposición las ha aprendido, otra parte no. Los que las han aprendido entienden que la única forma válida de resolver la crisis política presidencial es ajustándose a la consulta electoral, sometida a la ley, institucionalmente arbitrada, transparente y controlable. Esta vía por larga y compleja que sea es la única que puede llevar a buen puerto, es la única que puede resolver efectivamente la crisis. Y la puede resolver en dos sentidos. Primero, porque logra poner al pueblo a decidir. Segundo, porque cualquiera que sea la decisión que tome el pueblo dejará en claro que el poder del gobierno está sujeto al control popular y debe ajustarse a su soberanía.

No torcer el rumbo

A estas alturas del juego, el sentido común parece indicar que las firmas que reposan en el CNE son suficientes para convocar a un referéndum presidencial. El gobierno con su posición se ha encargado de evidenciarlo. Las amenazas de Diosdado Cabello, José Vicente Rangel y los gritos de guerra de Lina Ron sólo pueden esconder un gran susto. De lo contrario no se explica el empleo por decirnos desde el primer día que son chimbos o fraudelantas. Si así fuera no habría más que dejar al árbitro que lo determinara, pues si ello es tan obvio lo más fácil es dejar que la verdad se imponga por su propio peso.

El referéndum conviene al gobierno, a la oposición y sobre todo al país. Conviene al gobierno, pues tiene la suficiente popularidad, según lo registran las encuestas, para atreverse a reconstruir su legitimidad democrática. Conviene a la oposición porque es la única puerta segura para constituir un gobierno de transición sobre bases firmes; y conviene al país porque es la única forma pacífica, civilista y democrática de resolver la crisis política. Cualquiera que sea el veredicto de la decisión electoral refrendaria obligaría a todos a su efectivo acatamiento.

La defensa de la paz y la vida de la República depende pues de que no se quiebre el rumbo escogido. El árbitro electoral lleva la máxima responsabilidad en ello. Este debe demostrar la validez de sus decisiones con la máxima transparencia, reforzando su neutralidad, su claridad y su rapidez. Debe en consecuencia actuar como un organismo comprometido, en gestos y hechos, con las leyes y normas que regulan el juego, no con las partes.

Para que el árbitro electoral cumpla a cabalidad con sus funciones se requiere que se active la conciencia y la actitud ciudadana democrática que mayoritariamente existe en el país. Porque no se trata simplemente de endosarle un cheque en blanco al CNE, sino de cuidar y vigilar su desempeño, exigiendo su actuación imparcial. Hay que crear para ello organización ciudadana con suficiente capacidad técnica para estar alerta, mirar las entrañas mismas del proceso de verificación y hacer valer la voluntad de los firmantes. A estos corresponde en última instancia hacer constar su voluntad, en caso de que no quiera ser reconocida.

En estos momentos, los firmantes cuentan además con la participación internacional de la OEA y el Centro Carter como observadores permanentes del proceso electoral. Esta mediación hasta el momento ha demostrado con hechos su intención de asegurar la objetividad de la gestión del CNE. La conciencia ciudadana democrática no debe dudar en acudir a esta mediación sin temor a lastimar el orgullo patrio, ya que, dadas las circunstancias, representa un importante aliado en este momento.